OAJGL

En Pozuelo de Alarcón, siendo las **nueve horas del 19 de abril de dos mil diecisiete**, se reunieron en Alcaldía, al objeto de celebrar **sesión ordinaria** de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con el quórum establecido en el artículo 47.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, bajo la presidencia del **Sra. Alcaldesa**, los señores concejales que a continuación se expresan:

D. Felix Alba Núñez
D^a. Isabel Pita Cañas
D. Pablo Gil Alonso
D. Eduardo Oria de Rueda Elorriaga
D^a. Paloma Tejero Toledo

D^a. J^a. Beatriz Pérez Abraham, actuando como Concejales-Secretaria

Previa comprobación de la existencia del quórum necesario establecido en el artículo 47.1 del ROGA, para su válida celebración, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el **ORDEN DEL DÍA**:

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ALCALDÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Sra. Presidenta preguntó si algún miembro de la Junta tenía que formular alguna observación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 11 de abril de 2017. Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad **acordaron** aprobarla.

2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES SI LAS HUBIERE (ARTS.11 Y 12 ROP)

Se da cuenta de los siguientes escritos:

Primero: De D. Ángel González Bascuñana, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 14334/2017, por el que solicita:

- Expediente del nombramiento del Sr. (.../...).

Segundo: De D. Ángel González Bascuñana, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 14335/2017, por el que solicita:

- Expediente de excedencia forzosa de la Sra. (.../...).

Tercero: De D. Ángel González Bascuñana, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 14336/2017, por el que solicita:

- Expediente de contratación de la Sra. (.../...).

Cuarto: De D. Ángel González Bascuñana, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 14338/2017, por el que solicita:

- Expediente de contratación de la empresa encargada de llevar a término la Evolución de Riesgos Psicosociales en la Concejalía de Servicios Sociales.

Quinto: De D. Pablo Gómez Perpiñá, concejal portavoz del Grupo Municipal Somos Pozuelo, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 14401/2017, por el que solicita:

- Relación de sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo al Ayuntamiento relacionadas con la EDAR de Húmera

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE ABRIL DE 2017

Vistos los mencionados escritos, los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON:**

Primero: En relación al escrito con registro de entrada número 14334/2017, se le comunica que se dará vista de lo solicitado durante 5 días, a partir del próximo miércoles, 26 de abril de 2017, en el despacho del Director General del Área de Coordinación, D. (.../...), previa cita solicitada por el concejal interesado.

Segundo: En relación al escrito con registro de entrada número 14335/2017, se le comunica que se dará vista de lo solicitado durante 5 días, a partir del próximo miércoles, 26 de abril de 2017, en el despacho del Director General del Área de Coordinación, D. (.../...), previa cita solicitada por el concejal interesado.

Tercero: En relación al escrito con registro de entrada número 14336/2017, se le comunica que se dará vista de lo solicitado durante 5 días, a partir del próximo miércoles, 26 de abril de 2017, en el despacho del Director General del Área de Coordinación, D. (.../...), previa cita solicitada por el concejal interesado.

Cuarto: En relación al escrito con registro de entrada número 14338/2017, se le comunica que se dará vista de lo solicitado durante 5 días, a partir del próximo miércoles, 26 de abril de 2017, en el despacho del Director General del Área de Coordinación, D. (.../...), previa cita solicitada por el concejal interesado.

Quinto: En relación al escrito con registro de entrada número 14401/2017, se le comunica que se dará vista de lo solicitado durante 5 días, a partir del próximo lunes, 24 de abril de 2017, en el despacho del Director General del Área de Infraestructuras, D. (.../...), previa cita solicitada por el concejal interesado.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN

3. AUTORIZACIÓN A LA ASESORÍA JURÍDICA A NO INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A LA SENTENCIA DE 23 DE MARZO DE 2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº27 DE MADRID, DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 213/2015

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Coordinación, con fecha 3 de abril de 2017, que se transcribe:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- El 23 de marzo de 2017 fue dictada Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid en el procedimiento de referencia. La Sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A. y contiene el siguiente FALLO:

“ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil “Limpiezas, ajardinamientos y servicios Seralia, S.A.” frente a la actuación administrativa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón descrita en el primer fundamento jurídico, que se anula, debiendo condenarse a la Corporación municipal al abono en concepto de intereses de demora por el abono con retraso de las facturas a que se refieren las presentes actuaciones y cuyo concreto importe habrá de determinarse en ejecución de sentencia con arreglo a los criterios establecidos en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la presente Sentencia. Sin costas.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El recurso contencioso-administrativo se interpuso frente a la desestimación, por silencio administrativo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, de la reclamación formulada el día 13 de noviembre de 2014 en concepto de intereses de demora devengados por el pago tardío de las facturas presentadas en relación con los contratos de referencia.

SEGUNDA.- El artículo 81.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone:

“Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Letra a) del número 1 del artículo 81 redactada por el apartado cinco del artículo tercero de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal («B.O.E.» 11 octubre). Vigencia: 31 octubre 2011

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.º 4.º

Asimismo, el artículo 41.3 del mismo cuerpo legal, establece:

“En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.”

En relación a esta normativa y a los intereses de demora derivados del pago tardío de certificaciones o facturas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene reiteradamente declarado (Por todas, Sentencia de 27 de julio de 2015, rec: 667/2014):

“En ocasiones la cuantía del recurso viene dada por la acumulación en un mismo acto administrativo de diversas reclamaciones de deuda que son individualizables. Es esta cuantía, la de los distintos actos administrativos, a la que debe atenderse a efectos de fijación de competencia, pues es necesario dejar bien claro que cuantía del recurso y cuantía a efectos de recurribilidad en apelación, casación, o casación para unificación de doctrina son conceptos distintos. En efecto, la cuantía del recurso, según establece el art. 41 de la LJCA de 1998, se fija atendiendo al valor económico de la pretensión, por lo que, de solicitarse la anulación de un acto, habrá de atenderse al contenido económico del mismo y siempre depurando dicha cuantía de elementos ajenos al débito principal, tales como recargos, costas o cualquier otra clase de responsabilidad (art. 42. 1.a LJCA) salvo que los mismos fueran superiores al propio débito. Pero el propio artículo 41.3 se encarga de precisar que en los casos de acumulación o ampliación del recurso, no se comunicará la posibilidad de apelación o casación a las de cuantía inferior. Este criterio extiende sus efectos desde luego a las acumulaciones o ampliaciones producidas en sede judicial, es decir, cuando el inicial litigio se amplía a otros actos administrativos conexos (art. 34 , 35 y 36 de la LJCA 1998), o cuando se acumulan recursos inicialmente tramitados por separado (art. 37.1 LJCA) como se ha declarado reiteradamente por una jurisprudencia no necesitada de cita, por invariable ya que cada una de las pretensiones acumuladas conserva pese a la acumulación su propia individualidad cuantitativa respecto de la apelación, independientemente del resultado que arroje la suma de las cuantías de cada una de las pretensiones, siendo, en definitiva, la cuantía de cada una de éstas, aisladamente considerada, la que abre o cierra el cauce de la apelación con independencia de la cifra que alcance la suma de las cuantías de las diferentes pretensiones acumuladas.

Pues bien, en el caso presente de la demanda resulta con total claridad que el recurrente ejerció tres pretensiones acumuladas: 1ª la de abono de la factura nº 0701A102 , 2ª.- la de abono de sus intereses de demora y 3ª.- la de abono de los intereses de demora de las certificaciones nº2, 3, 8 y 10, pretensión esta última que no alcanza la cuantía mínima para acceder a la apelación por lo que el recurso de apelación interpuesto contra la concesión de tales intereses de demora así como de los intereses anatocísticos sobre tales intereses deviene inadmisibles por razón de la cuantía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.1 .a) de la LRJCA, por lo que debe declararse su inadmisión, que en fase de Recurso se torna en causa de desestimación, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.”

Como quiera que en el recurso de referencia ninguno de los intereses de demora, individualmente considerados por factura, no superan la cuantía mínima para acceder a la apelación, dicho recurso se torna inadmisibles para ambas partes, declarándose incluso de oficio por el Tribunal si llega a interponerse.

TERCERA.- Con independencia de lo anterior, la Sentencia, al dar respuesta a pretensiones de las partes, no comete errores “in iudicando” en cuanto a la prueba practicada, ni en relación a la aplicación de la normativa y su interpretación jurisprudencial, por lo que no existen, en puridad, motivos jurídicos de apelación.

Conviene indicar que esta Asesoría Jurídica ya ha recomendado, en evitación de litigios y costas judiciales, la resolución en vía administrativa dichas solicitudes de reclamación de intereses de demora, sin que hasta la fecha, dicho ruego haya tenido favorable acogida, por lo que sigue correspondiendo a este órgano directivo suplir en vía judicial al órgano gestor en lo que no ha realizado en vía administrativa, no siendo ésta una buena práctica en la defensa del interés público pues gran parte de las reclamaciones que se efectúan podrían ser resueltas sin necesidad de acudir a los Tribunales de justicia.

Por último, poner de manifiesto lo que señala Su Señoría en relación a una de las alegaciones que esta parte formuló relativa a documentación que fue aportada por la demandante a los autos:

“En todo caso, se trata de un documento que debía formar parte del expediente administrativo y que la Administración indebidamente no incorporó.”

Reproche que realiza a esta Administración Pública y que nos obliga a recordar, sin perjuicio de que haya podido ser un error, que el expediente administrativo ha de ser remitido a los órganos jurisdiccionales en procedimientos contencioso-administrativos en los que tengamos la condición de demandada, EN SU INTEGRIDAD, con independencia de que los documentos que lo conforman puedan o no ser perjudiciales para los intereses del Ayuntamiento. A lo que ha de sumarse que la falta de algún documento que haya de formar parte del expediente administrativo conforme al art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, perjudica la actuación jurisdiccional que corresponde a este órgano directivo de

conformidad con lo prevenido en el art. 129 de la LBRL, al partir de unas premisas fácticas erróneas en el diseño de la estrategia jurídica de defensa.

Por todo lo anteriormente expuesto, a la Junta de Gobierno Local y tras someterlo a la conformidad del Primer Teniente de Alcalde, **PROPONGO** la adopción del siguiente acuerdo:

Autorizar a la Asesoría Jurídica a NO interponer recurso de apelación frente a la Sentencia de 23 de marzo de 2017 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 27 de Madrid dictada en el Procedimiento Ordinario 213/2015.”

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

4. AUTORIZACIÓN A LA ASESORÍA JURÍDICA A NO INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A LA SENTENCIA DE 21 DE MARZO DE 2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº18 DE MADRID, DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 47/2016

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Coordinación, con fecha 6 de abril de 2017, que se transcribe:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 21 de marzo de 2017 fue dictada Sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 18 en el Procedimiento Ordinario 47/2016 relativa a la reclamación efectuada por la contratista SERANCO, S.A. de abono de 129.511,05 euros en concepto de unidades de obra en exceso realizadas (a su juicio) y de 77.764, 43 euros en concepto de indemnización por responsabilidad contractual y por daños producidos por la supuesta generación de costes indirectos (TOTAL: 207.275,48 euros). En dicha Sentencia se estima parcialmente la reclamación judicialmente efectuada exclusivamente en la parte correspondiente al aumento de espesor de la capa de microaglomerado echado en determinados tramos del CARRIL BICI ejecutado y objeto del contrato, siendo el Fallo del siguiente tenor literal:

QUE DEBO ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad SERANCO, SA, contra la presunta desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación planteada por la empresa ahora demandante al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el día 9 de octubre de 2015, para que se le abonasen 209.547,61 euros (por obra ejecutada) y 27.892,86 euros (por lucro cesante); así como también por la reclamación presentada el día 29 de octubre de 2015, por importe de 93.854,34 euros, en concepto de mayores costes derivadas del contrato consistente en la construcción de cinco nuevos tramos de carril bici en Pozuelo de Alarcón, reconociendo el derecho de la empresa recurrente a percibir los costes superiores que significaron el incremento de espesor de la unidad mU07F045-M. La cantidad así a abonar será fijada en ejecución de sentencia tomando como referencia los criterios establecidos en el informe elaborado por la Dirección facultativa de la obra, el día 18 de septiembre de 2015, en sus páginas 11 y 12, es decir, los folios 323 y 324 del expediente administrativo, debiendo DESESTIMARSE el resto de pretensiones relativas al abono por la ejecución de unidades o partidas de obra no incluidas en el proyecto original, así como la indemnización por el retraso en la ejecución de las obras y las consecuencias adversas a nivel económico que esa situación ha provocado a la compañía recurrente. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de apelación en dos efectos que deberá interponerse por escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación y del que conocerá, en su caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Segundo.- Por el firmante se ha recabado la opinión técnica y cuantificación apriorística del importe que, en ejecución de Sentencia podría determinarse y al que vendría condenada a pagar esta Administración habiéndose calculado que, si como impone la Sentencia, se utilizaran los criterios de la Dirección Facultativa, estaríamos ante el pago de 7.009, 88 euros, cálculo que se efectúa sin perjuicio del que resulte en vía judicial y en incidente de ejecución de Sentencia.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La anterior Sentencia acoge casi íntegramente las tesis mantenidas en el proceso por esta Administración, salvo en lo referido a dicho espesor. Por tanto el análisis de la procedencia de la interposición de recurso de apelación, por lo que a esta Administración concierne, ha de centrarse en la parte que le perjudica y por tanto exclusivamente en la parte estimatoria de la misma.

La Sentencia, descartando el informe de parte acompañado por la demandante junto a su escrito de demanda y que fue ratificado en sede judicial mediante la correspondiente práctica de prueba pericial, asume, a nuestro juicio muy oportuna y pertinentemente, el contenido del informe de la Dirección Facultativa. Y en relación con la parte estimatoria señala en su FD Quinto:

«Con relación al incremento de espesor de la citada unidad mU07F045-M, el informe establece unas conclusiones relevantes respecto a la reclamación planteada en este sentido por la parte actora, y son las siguientes:

“En relación al incremento de espesor reclamado de la capa extendida de la unidad mU07F045-M por parte de la DF cabe hacer la siguiente consideración:

-Efectivamente de acuerdo a las mediciones previas al extendido de la unidad se ha podido comprobar que existía un espesor superior a 3 cm entre la capa de zahorra terminada y la cara superior del bordillo.

- La medida de este sobre espesor puede estar en torno a los 0,4 cm de acuerdo a las fotos tomadas en la obra.

- La unidad mU07F045-M es abonada de acuerdo al cuadro de precios por m2 de extendido, totalmente ejecutada.

- En caso de realizar una medición proporcional del incremento de espesor de 0,4 cm sobre los 3 cm previstos en el proyecto, la misma se correspondería con un incremento de medición de 13,33 % lo que aplicado a los m2 extendidos realmente ejecutados (3.576,47 m2) y al precio de proyecto supondrían un total de 476,87 m2 y un importe de ejecución material (sin baja) de 7.009, 88 euros.

- Por parte de esta DF se indicó de manera verbal al contratista la posibilidad de reconocer este incremento de espesor en la liquidación del proyecto, habiéndose reconocido por parte del contratista esta posibilidad al estar definido el precio del proyecto en m2.

- Por parte de esta DF se informa que dicho importe podría asumirse sin sobrepasar el 10% de la liquidación final de la obra, si bien no se ha incorporado en el proyecto de liquidación presentado por estar previsto el abono de la misma en m2, sometiéndose el reconocimiento del mismo a consideración de la propiedad” (folios 323 y 324)»

El aumento del espesor resultaba necesario para la ejecución de las obras, por aumento de unidad de obrar por encima de lo previsto en el Proyecto y atendiendo a la realidad, autorizado por la Dirección Facultativa, actuando el contratista en la legítima confianza, por tanto, de que tal aumento de espesor sería abonado con la liquidación final de la obra, lo que no se produjo. Concurren, como acertadamente recoge la Sentencia, las premisas necesarias para que haya de abonarse el sobre coste de tal aumento de espesor, en aplicación de la doctrina de evitación del enriquecimiento injusto.

Por ello la sentencia concluye al respecto en su FD Quinto, teniendo luego su trasposición al Fallo en su parte estimatoria, que «deben abonarse a la empresa recurrente los costes superiores que significaron el incremento de espesor de la citada unidad mU07F045-M. La cantidad así a abonar será fijada en ejecución de sentencia tomando como referencia los criterios establecidos en el informe elaborado por la Dirección Facultativa de la obra, el día 18 de septiembre de 2015[...]».

En este sentido se ha expresado de forma constante la jurisprudencia. Conviene recordar lo dicho recientemente por el TS al respecto en su Sentencia de 28 de enero de 2016 de la Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 7ª, rec. unif. doctrina nº 2603/2015 que señala que «de lo que se trata es de determinar si la Administración puede beneficiarse de los vicios originados por ella misma, aceptando los servicios prestados por el contratista en exceso, a solicitud de la propia Administración, que exige los mismos, aunque no los formalice conforme a derecho. Esta actuación, en efecto como se dice en las sentencias de contraste, supone un enriquecimiento injusto por parte de la Administración que ha de ser debidamente resarcido, máxime si por funcionarios de la propia Administración se acredita la existencia del gasto en la cuantía solicitada por la recurrente» (FD Cuarto).

Y en particular en torno al contrato de obras el mismo TS en su Sentencia de 20 de julio de 2005 (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 4ª, rec. cas. núm. 1129/2002) indicó: «Recordábamos en nuestra sentencia de 10 de noviembre de 2004 que la doctrina del enriquecimiento injusto que pudiera derivar de la ejecución de una obra para la Administración y del equilibrio económico que debe mantenerse en el cumplimiento del contrato a que se refiere la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 1991, siguiendo lo vertido en las de 20 de diciembre de 1983 y 2 de abril de 1986, significa la exigibilidad por el contratista del pago del exceso de obra necesario para completar el proyecto. O en términos de la sentencia de 18 de julio de 2003 el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino

que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración» (FD Quinto).

Por tanto, la oportuna y adecuada toma en consideración del informe técnico de la Dirección Facultativa, que ha llevado al convencimiento fáctico del juzgador suficiente, junto al jurídico, para rechazar la mayor parte de la reclamación, lleva también, en atención a su contenido en cuanto a este extremo, y en cumplimiento de la doctrina anteriormente mencionada, de forma procedente e incontrovertible, a la estimación parcial operada. En consecuencia, esta asesoría jurídica no encuentra razones de peso jurídico suficientes para la formular frente a dicha Sentencia, recurso de apelación con unos mínimos visos de prosperabilidad, lo que obliga a este órgano directo a proponer la no interposición del mismo.

Segundo.- Lo anteriormente expuesto justifica la propuesta que se formula. No obstante debe añadirse que, a pesar del ofrecimiento de apelación que hace la Sentencia, teniendo en cuenta la cuantía que, con la interposición del recurso de apelación por el Ayuntamiento, estaría en solfa (en principio 7.009, 88 euros como se ha expuesto), estaríamos por debajo de la "summa gravaminis" del recurso de apelación (30.000 euros) establecida en el art. 81.1.a) de la LJCA, no encontrándose en ninguna del resto de casos previstos en dicho precepto; lo que conllevaría, así apreciado, la inadmisión del recurso de apelación (o desestimación si es en Sentencia) con la correspondiente condena en costas a esta Administración. Y ello sin perjuicio de que para la demandante sí fuera apelable.

La cuantía a los efectos de acceso al recurso de apelación, será la diferencia entre lo establecido en la Sentencia de instancia, y lo pretendido en la apelación. Así se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otras en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 9ª, de 30 de diciembre de 2009, nº 2002/2009, rec. 65/2009, señalando:

«Esta Sala no puede sustraerse a los múltiples pronunciamientos judiciales interpretativos de la «summa gravaminis» a efectos de los recursos de apelación y casación en el seno de esta jurisdicción, a cuyo tenor la cantidad determinante de la cuantía del recurso debe fijarse atendiendo a la diferencia entre lo pedido y lo concedido en primera instancia (STS de 10-12-1999 precisamente en relación con el recurso de apelación), de modo que tal magnitud viene establecida por «la cuantía que realmente se ventila en el recurso, con independencia de la que tenga el asunto principal» (STS de 28-9-2004, entre muchas otras, en cuanto al recurso de casación).

La misma doctrina ha sido ya aplicada por este Tribunal Superior. Por ejemplo, la Sentencia núm. 11232/2008, de 28-10, de su Sección 4ª, declara lo siguiente:

En relación a la determinación de la cuantía mínima para acceder al recurso de casación, la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado de manera uniforme que no hay que tener en cuenta el importe de las pretensiones económicas deducidas inicialmente por la parte demandante en la instancia, en los supuestos en que la sentencia allí dictada estime parcialmente dichas pretensiones, sino que en tales casos a lo que hay que atender para determinar la cuantía mínima que permite el acceso a la casación es al importe discutido realmente en la misma, esto es la cantidad no reconocida al recurrente por la sentencia de instancia, constituida por la diferencia entre lo pretendido y lo concedido, si quien interpone el recurso de casación es dicho recurrente en la instancia, y la cantidad reconocida por la sentencia de instancia e impugnada en casación, que en este caso estará constituida por la diferencia entre lo pretendido y lo desestimado por dicha sentencia de instancia, si quien interpone la casación es el demandado en la instancia, y esta doctrina es perfectamente trasladable al recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, pues se aprecia la identidad de razón entre uno y otro supuesto que permite su aplicación.

En este sentido se pronuncia la referida Sala Tercera del Tribunal Supremo en Auto de 27 de marzo de 2.003 (Recurso de Queja núm. 4435/2.000) y Sentencias de su Sección 5ª de 28 de septiembre de 1.999 (Recurso núm. 5265/1.993), de la Sección 4ª de 28 de septiembre de 2.004 (Recurso núm. 2790/2.001), y de la Sección 4ª de 10 de noviembre de 2.004 (Recurso núm. 6647/1.999) EDJ 2004/197390, que en su fundamento jurídico quinto matiza que "Aunque este Tribunal parte en principio del criterio de que la cuantía a efectos de casación debe ser la que corresponde al asunto de instancia, sin embargo, en aquellos supuestos en los cuales la sentencia de instancia reduce el ámbito discutido de la cuantía del recurso (por estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo), esta Sala tiene reiteradamente declarado que procede reducir la summa gravaminis que determina la admisibilidad del recurso de casación a la cuantía económica no reconocida en la sentencia o a dicha cuantía económica, según quien interponga el recurso de casación. El criterio seguido con carácter general es el de que en el caso de que el recurso de casación no abarque en su totalidad el ámbito económico reconocido por la sentencia impugnada, sino solamente una parte del mismo, se considera que la summa gravaminis se reduce a la cuantía que realmente se ventila en el recurso, con independencia de la que tenga el asunto principal (Sentencias, entre otras, de 11 de mayo de 2.000, 10 de julio de 2.002, 27 de junio de 2.002 y 17 de mayo de 2.002)" (FD Segundo) [En este mismo sentido y más recientemente la STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, de 11 de mayo de 2016, nº 178/2016, rec. 948/2015].

Por todo lo anteriormente expuesto, a la Junta de Gobierno Local y tras someterlo a la conformidad del Primer Teniente de Alcalde, **PROPONGO** la adopción del siguiente acuerdo:

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE ABRIL DE 2017

Autorizar a la Asesoría Jurídica a NO interponer recurso de apelación frente a la Sentencia de 21 de marzo de 2017 dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 18 de Madrid, en el PO 47/2016.”

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

5. DESESTIMAR LA SOLICITUD DE INFORME PARA COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Coordinación y del Concejal Delegado de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, con fecha 5 de abril de 2017, que se transcribe:

“HECHOS

Primero.- Dentro de la Concejalía de Presidencia de este Ayuntamiento figura actualmente vacante, por reciente cese voluntario de su titular, el puesto nº ref. 1546, denominado Titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-Secretario de la misma, perteneciente a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior, Subgrupo A1 y nivel de complemento de destino 30, según se deriva de la vigente Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario. No obstante lo anterior, debe añadirse que para dicho puesto se ha nombrado accidentalmente a una funcionaria municipal, Técnico Superior de Administración General, por Resolución de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid de fecha 3 de febrero de 2017.

Segundo.- Por parte de D. (.../...), quien dice ser funcionario con habilitación nacional de categoría superior, se ha recibido solicitud presentada en el Registro General el pasado (.../...) de 2017, nº R.E. (.../...)/2017, para que por este Ayuntamiento se informe favorablemente su nombramiento en comisión de servicios en el puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, actualmente vacante.

Tercero.- Por la Concejalía de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, se ha formulado propuesta desestimatoria.

A los anteriores HECHOS son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala en su apartado 7 que “Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental”. Por otro lado, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, regula en su artículo 32 la comisión de servicios, en el siguiente sentido:

“1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán conferir comisiones de servicios a funcionarios con habilitación de carácter nacional destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente acreditada en el expediente.

2. La Dirección General de la Función Pública podrá conferir comisiones de servicio en los supuestos siguientes:

a) Para ocupar puestos reservados situados en Comunidad Autónoma distinta de la del puesto de procedencia.

b) Para cooperar o prestar asistencia técnica, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual, a la Administración General del Estado, o a la de una Comunidad Autónoma distinta de la de procedencia.

c) Para participar, por tiempo no superior a seis meses, en misiones de cooperación al servicio de organismos internacionales de carácter supranacional, entidades o Gobiernos extranjeros.

3. En todos los supuestos anteriores, la comisión de servicios se efectuará a petición de la Administración interesada y con la conformidad de la entidad donde el funcionario preste sus servicios.

4. El tiempo transcurrido en esta situación será tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto desde el que se produce la comisión, salvo que se obtuviese destino definitivo en el puesto de trabajo desempeñado en comisión de servicios o en otro del mismo o inferior nivel, en

cuyo caso, a instancia del funcionario, podrá ser tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado correspondiente a este último.

A efectos de valoración de los restantes méritos generales, el tiempo en comisión de servicios se entenderá prestado en el puesto efectivamente desempeñado”.

A este respecto, debe significarse que ya se encuentra en trámite para su aprobación un nombramiento provisional para el mismo puesto de trabajo, solicitado con anterioridad por otra interesada (número de registro de entrada (.../...)/2017, de (.../...)), siendo esta forma de provisión prioritaria sobre otras, conforme señala el artículo 30.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la tramitación de la comisión de servicios no exige informe alguno que pueda ser solicitado directamente por los interesados a los Ayuntamientos, como por ejemplo acontece con los nombramientos provisionales (art. 30.1 del propio Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio), sino que, como señala el artículo 32.3 arriba transcrito, “la comisión de servicios se efectuará a petición de la Administración interesada”, y sin perjuicio de que la conformidad de la Administración de origen.

Por otro lado, la apreciación de las circunstancias que la normativa general o supletoria exige para iniciar el procedimiento, -esencialmente, la “urgente e inaplazable necesidad”, en términos del artículo 64.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado-, corresponde en exclusiva a la Administración solicitante y no al interesado, pues es aquélla y no éste quien puede certificar que realmente acontecen dichos condicionantes.

Segundo.- Por lo que se refiere a la competencia, corresponde resolver la solicitud de informe en materia de provisión de puestos de funcionarios con habilitación de carácter nacional a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, por tener atribuida la residual que contempla el artículo 127.1.h) de la LRBRL, así como el artículo 45.3.h) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de este Ayuntamiento.

*De acuerdo con todo lo anterior se **PROPONE** al Concejal de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, en ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:*

Único.- Desestimar la solicitud presentada por D. (.../...) con fecha de entrada de Registro General el pasado (.../...) de 2017, nº R.E. (.../...)/2017, interesando de este Ayuntamiento la emisión de informe favorable a su nombramiento en comisión de servicios para el puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, por los motivos indicados.”

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

6. ESTIMAR LA SOLICITUD DE INFORME DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL PUESTO DE TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Coordinación y del Concejal Delegado de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, con fecha 5 de abril de 2017, que se transcribe:

“HECHOS

Primero.- Dentro de la Concejalía de Presidencia de este Ayuntamiento figura actualmente vacante, por reciente cese voluntario de su titular, el puesto nº ref. 1546, denominado Titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-Secretario de la misma, perteneciente a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior, Subgrupo A1 y nivel de complemento de destino 30, según se deriva de la vigente Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario.

No obstante lo anterior, debe añadirse que para dicho puesto se ha nombrado accidentalmente a una funcionaria municipal, Técnico Superior de Administración General, por Resolución de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid de fecha 3 de febrero de 2017.

Segundo.- Por parte de D^a. (.../...), funcionaria con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría superior, se ha recibido solicitud presentada en el Registro General el pasado (.../...) de 2017, nº R.E. (.../...)/2017, para que por este Ayuntamiento se informe favorablemente su nombramiento provisional en el indicado puesto.

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE ABRIL DE 2017

Tercero.- Por la Concejalía de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, se ha formulado propuesta para el inicio del expediente.

Cuarto.- Por el Ayuntamiento de Navalcarnero se ha resuelto informar favorablemente el nombramiento provisional solicitado por la indicada funcionaria.

Quinto.- La interesada ha remitido, mediante correo electrónico, determinada información relativa a su relación de servicio, la cual queda incorporada al expediente.

Sexto.- Con fecha de 5 de abril de 2017 la Intervención General ha emitido el informe favorable que consta en el expediente.

A los anteriores HECHOS son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala en su apartado 7 que "Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental".

Por otro lado, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, regula en su artículo 30 este tipo de nombramientos, en el siguiente sentido:

"1. De acuerdo con las corporaciones afectadas, en el caso de existencia de más de un posible candidato, y, en todo caso, con la autorización de la corporación en que se cesa y previa conformidad de los interesados, el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva podrá efectuar nombramientos provisionales, con carácter prioritario sobre las formas de provisión previstas en los artículos 31, 32, 33 y 34, en puestos vacantes o en aquellos otros que no estén desempeñados efectivamente por sus titulares por encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Comisión de servicios.
- b) Suspensión provisional.
- c) Excedencia por cuidado de hijos durante el primer año.
- d) Enfermedad.
- e) Otros supuestos de ausencia.

El órgano competente de la comunidad autónoma respectiva deberá efectuar nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos accidentales e interinos, cuando reciba la solicitud de tal nombramiento por parte de un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos para su desempeño. El nombramiento provisional implicará el cese automático de la persona que venía ocupando dicho puesto por nombramiento accidental o interino.

2. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados de la subescala y categoría a que esté reservado el puesto. Cuando ello no fuera posible, y con carácter excepcional, podrán recaer en habilitados de distinta subescala o categoría en posesión de la titulación exigida para el acceso a aquella.

3. Los nombramientos provisionales implicarán, en cualquier caso, el cese en el puesto que se estuviera desempeñando.

4. El plazo posesorio será el mismo que se establece en el artículo 23 del presente Real Decreto.

5. El nombramiento provisional podrá ser revocado en cualquier momento por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que lo efectuó, a propuesta de la Corporación local interesada, con audiencia del funcionario o a instancia de éste, previo informe de la Corporación".

Se ha comprobado, de acuerdo con lo aportado por la solicitante, que la misma reuniría los requisitos de desempeño que la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario prevé para el puesto a cubrir, de manera que podría informarse favorablemente el nombramiento provisional solicitado.

Segundo.- Por lo que se refiere a la competencia, corresponde resolver la solicitud de informe para el nombramiento provisional a la Junta de Gobierno Local, por tener atribuida la residual que contempla el artículo 127.1.h) de la LRBRL, así como el artículo 45.3.h) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de este Ayuntamiento.

En cuanto a la competencia para resolver el nombramiento provisional, de conformidad con la normativa indicada, corresponde a la Comunidad de Madrid. En concreto y conforme al artículo 7 del Decreto 194/2015, de 4 de

agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, corresponderá formular la resolución que corresponda a la Dirección General de Administración Local, dependiente de la referida Consejería.

De acuerdo con todo lo anterior se **PROPONE** al Concejal de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior, en ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Único.- Estimar la solicitud presentada presentada en el Registro General el pasado (.../...) de 2017, nº R.E. (.../...)/2017, por D^a. (.../...), funcionaria con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría superior, y por tanto informar favorablemente su nombramiento provisional para el puesto de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.”

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO

7. DAR CUENTA DE LAS FACTURAS CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017 DE IMPORTES INFERIORES A 18.000 € MÁS IVA Y DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES SI LOS HUBIERE

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación y una vez expuesta, la relación elevada por la Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Desarrollo Económico, de las facturas contabilizadas de dicha Área durante el mes de marzo de 2017, de importes inferiores a 18.000 euros más IVA, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo adoptado en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 3 de febrero de 2016, **los señores reunidos quedaron enterados.**

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA

8. DAR CUENTA DE LAS FACTURAS CONTABILIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017 DE IMPORTES INFERIORES A 18.000 € MÁS IVA Y DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES SI LOS HUBIERE

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación y una vez expuesta, la relación elevada por la Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Familia, de las facturas contabilizadas de dicha Área durante el mes de marzo de 2017, de importes inferiores a 18.000 euros más IVA, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo adoptado en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 3 de febrero de 2016, **los señores reunidos quedaron enterados.**

Asimismo se da cuenta de los siguientes contratos menores:

- Resolución de la Concejal Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Mujer de 06 de marzo de 2017 por el que se adjudica el contrato de ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DERIVADOS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, Exp. 2017/CM/008 a LA DESPENSA (Cadam Salinas) Lote 1 y SIMPLY MARKET (Ecosuper Alimentación S.L.) Lote 2, en las condiciones que figuran en dicha resolución.
- Resolución de la Concejal Delegada de Educación, Juventud y Fomento del Empleo de 13 de marzo de 2017 por el que se adjudica el contrato de PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “RECICLO POZUELO”, Exp. 2017/CM/014 a NATUR DEL SIGLO XXI, S.L. en las condiciones e figuran en dicha resolución.

Los señores reunidos **quedaron enterados.**

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS

9. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS (MEMORIA VALORADA) DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EL COLEGIO LAS ACACIAS

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda y Contratación y del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras, con fecha 11 de abril de 2017, que se transcribe:

“HECHOS

Primero.- Por el Concejal-Delegado de Obras e Infraestructuras se ha remitido para su aprobación el PROYECTO DE OBRAS (MEMORIA VALORADA) DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EL COLEGIO LAS ACACIAS, redactado por el arquitecto municipal Jefe de Obras Públicas D. (.../...), con un presupuesto de 70.097,50 €, I.V.A. excluido (84.817,98 € IVA incluido), y un plazo de ejecución de tres meses.

Dicho proyecto contiene la siguiente documentación:

- Memoria.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Estudio de gestión de residuos
- Estudio básico de seguridad y salud.
- Mediciones y presupuesto.
- Planos.

Segundo.- Constan en el expediente los siguientes informes favorables de la Gerencia Municipal de Urbanismo:

- Informe de la Arquitecto técnico municipal de fecha 17 de enero de 2017.
- Informes del Servicio de Licencias, Control Urbanístico y Edificación Deficiente de fechas 14 y 16 de marzo de 2017.
- Informe del Técnico de Administración General de 21 de marzo de 2017.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 121.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.

SEGUNDO.- El proyecto aportado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 123.2 del mismo texto legal y artículo 126 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como los artículos 4 y siguientes del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

TERCERO.- El artículo 151.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, dispone que cuando los actos de uso del suelo, construcción y edificación sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística a los efectos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.

A este respecto, se han emitido informes favorables por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

CUARTO.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno Local, por ser el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 121.1 del mismo texto legal.

*De acuerdo con todo lo anterior, se **PROPONE** al Concejal-Delegado de Obras e Infraestructuras y a la Concejal-Delegada de Hacienda y Contratación, en ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:*

ÚNICO.- Aprobar el PROYECTO DE OBRAS (MEMORIA VALORADA) DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EL COLEGIO LAS ACACIAS, redactado por el arquitecto municipal Jefe de Obras Públicas D. (.../...), con un presupuesto de 70.097,50 €, I.V.A. excluido (84.817,98€ IVA incluido), y un plazo de ejecución de tres meses.”

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE ABRIL DE 2017

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

10. APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS

El expediente ha sido examinado en la sesión de 17 de abril de 2017 por la Comisión General de Coordinación.

Vista la siguiente propuesta:

1. **RJ-0264**

Vista la propuesta del Cuarto Teniente de Alcalde y Titular del Área de Infraestructuras, con fecha 10 de abril de 2017, que se transcribe:

“Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 18.000,00 euros más IVA presentadas por los diferentes Servicios y visto el informe propuesta del Órgano de Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

Se propone al Órgano Colegiado:

1º.- Autorizar el siguiente gasto por un importe total de 368.048,54 €:

<u>OPERACIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
220170003738	RC-SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO 2017 Y REGULARIZACIÓN 2015	368.048,54 €

Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes **ACORDARON** aprobar la propuesta de resolución transcrita.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las **nueve horas y cuarenta minutos** del citado día, de lo que para constancia y validez de lo acordado se levanta la presente acta que visa la Sra. Alcaldesa-Presidenta ante mí, la Concejala-Secretaria, de lo que doy fe.

Pozuelo de Alarcón, 19 de abril de 2017

LA CONCEJAL-SECRETARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

VºBº ALCALDESA
PRESIDENTA.-

Fdo.: J. Beatriz Pérez Abraham

Fdo.: Susana Pérez Quisiant